

to de lo demas: que en tanto asegura Pimentel que dicho administrador no puede fundar y motivar su acto, en cuanto reputa contrario á la Constitucion con el cobro de alcabalas, lo cual no es esacto, porque el art. 124 de la Constitucion Federal, que prescribió la abolicion de las alcabalas y aduanas interiores de la República, supone como condicion natural el previo establecimiento de los impuestos necesarios para organizar la hacienda pública, reemplazando las alcabalas y la expedicion de la ley ó leyes indispuetas para hacer efectiva la prevencion constitucional, la cual, en consecuencia, no puede considerarse violada mientras no se llenen esas condiciones; por lo espuesto, se decreta: que se revoca la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 17 de Febrero último, por el juez de Distrito de Querétaro, que otorga el amparo; y se declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á D. Ramon Pimentel, contra el acto del Administrador de rentas del Estado de Querétaro, que le embargó catorce fanegas de maíz introducidas sin el pago de los derechos de alcabala.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Anza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Marzo 31 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, por D. Quirino Jáuregui, contra el Gefe político de esa ciudad, que mandó extraer del lado del quejoso á la niña Concepcion Oviedo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Gefe de hacienda que suscribe, desempeñando en el presente asunto el Ministerio fiscal, dice: que el C. Quirino Jáuregui se ha presentado ante ese Juzgado pidiendo amparo contra la orden que para extraerle una hija de su casa ha espedido la Gefatura política de esa ciudad, alegando el quejoso que han sido violadas en su persona las garantías que le otorgan los arts. 13 y 16 de la Constitucion federal. Pedido y dado el informe se me ha corrido traslado para los efectos que indica el art. 5º de la ley de la materia de 20 de Enero de 1869. No es posible dejar de tocar la cuestion en su fondo, aunque á grandes trazos, para emitir mi parecer sobre si debe ó no decretarse la suspension de la orden que motiva este juicio.

Ahora bien, el quejoso alega en el caso, primero: que se le ha juzgado por leyes privativas y por un Tribunal especial; y segundo, que se le ha molestado en su persona, familia y domicilio, violándose los arts. 13 y 16 de la Constitucion.

En mi humilde concepto ni una ni otra cosa se ha verificado en el caso: no lo primero, porque la orden de extraccion no puede calificarse como sentencia, pues solo se trata de una providencia previa para abrir despues un juicio: y no lo segundo, porque la Constitucion no ha tratado de inutilizar la accion de la autoridad administrativa en el ejercicio de sus facultades naturales, y á tanto equivaldria la interpretacion tan absoluta que el quejoso da al texto de la Constitucion.

Si esa interpretacion se adoptase, la regla probaria tanto que nada probaria, porque entonces quedaba inutilizada la autoridad política para la persecucion, por ejemplo, de todos los delitos, mientras se pasa su conocimiento á la autoridad judicial.

Dos consideraciones ademas deben tenerse presentes. La una, que la orden en la actualidad no está subsistente,

pues que ha quedado reducida á un simple depósito de la hija en la casa del C. Lic. Gregorio Vazquez. La otra circunstancia atendible es que el C. Gefe político, á petición de la madre ha dictado estas providencias, no con el fin de ahorrarse el conocimiento del asunto, sino únicamente para evitar que la hija sea separada de propia autoridad del padre del lado de la madre y para pasar el asunto al juez competente, ó á la autoridad judicial que por lo menos ya tiene noticia del negocio. Así lo dice el Gefe político en su informe y así se desprende también del escrito del quejoso; hasta hoy no es exacto que el primero se haya avocado el conocimiento del citado asunto.

Serán injustas las pretensiones de la madre, podrán serlo también las del padre; difícil es marcar aquí la línea de sus derechos; pero no es de la incumbencia de los Tribunales. Basta saber que no se han violado las garantías individuales del quejoso, para que la autoridad federal sea ajena á las demás cuestiones que nazcan del caso.

Por lo mismo soy de opinión que no se suspenda la providencia dictada por el C. Gefe político de esta ciudad. Tal es mi parecer que vd. aprobará si lo creyere arreglado á justicia.

San Luis Potosí, Enero 13 de 1873.
—*J. Robles Linarcs.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Febrero 27 de 1873.—Por ocupación del C. Gefe.—*Ausencio Pozo.*

OTRO PEDIMENTO FISCAL.

C. juez de Distrito:

El que suscribe, Gefe de hacienda y llevando la voz fiscal, dice: que el C. Quirino Jáuregui se ha presentado pidiendo amparo contra la orden que para extraerle una hija espidió el C. Gefe político de esta ciudad, alegando el quejoso que al procederse así han sido violadas las garantías que le otorga la Constitución en sus arts. 13 y 16. Emitida ya mi opinión sobre la suspensión del acto, se me ha corrido traslado para los efectos del art. 9º de la ley de 29 de Enero de 1869.

Ya he tenido oportunidad de manifestar anteriormente, que en el caso, no creo que al solicitante en virtud de aquella orden se le haya juzgado por leyes privativas y por un Tribunal especial, ni menos que se le haya molestado en su persona y familia, fuera de los límites que para esto último permite la ley fundamental de la República.

La orden de extracción notoriamente no puede considerarse como una sentencia para venir á concluir, que la ha pronunciado un Tribunal especial y menos aplicando leyes privativas, que bajo ninguna aspecto se han aplicado en el caso. Asentar semejantes especies es invertir completamente las ideas mas comunes sobre el punto de que tratamos. El C. Gefe político al dictar la referida orden no se ha constituido en juez para pronunciar un fallo, sin que por esto al dictarla se haya escedido de la esfera de sus atribuciones. Creo pues, que en el círculo de sus funciones administrativas, ha estado en su derecho para dictar la mencionada orden una vez que solo se ha tratado de una medida precautoria, para consignar despues el asunto al juez, que ya tenía conocimiento del negocio.

Por otra parte, en la actualidad ya no se trata de la extracción ordenada, pues consta de autos que con permiso de la autoridad y de consentimiento del quejoso, la hija ha quedado depositada en la casa del C. Lic. Gregorio Vazquez y á disposición, no del Gefe político, sino del juez competente, para que ante él se deslinden las cuestiones que se ventilan sobre la patria potestad y sus efectos. ¿Puede decirse que supuesto esto, han sido violadas las garantías que otorga la Constitución al quejoso? Evidentemente no: ya al presentarse solicitando el amparo había cesado la causa en que lo funda, ya se había retirado la orden, reduciéndose todo á un simple depósito de la hija mientras resolvía la autoridad competente, y esto de ningún modo puede decirse que vulnera los derechos del hombre proclamados por la Constitución.

Estas mismas observaciones son también bastantes para demostrar que tampoco se ha faltado por el C. Gefe político á los preceptos de la misma ley fundamental en su art. 16. Esto exige en el caso que el mandamiento de la autori-

dad debe tener tres condiciones: que se expida por escrito para que determine qué es lo que ha de practicar el agente que lo ejecute; que proceda de la autoridad competente y que funde y motive la causa del procedimiento. De estas tres circunstancias solo una habria podido faltar si la orden de extraccion se hubiese llevado á efecto, es decir, la de fundar y motivar la causa del procedimiento; pero aun esta estaria cumplida, una vez que las esplicaciones de la misma orden y las posteriores de la autoridad, han sido bastante esplicitas para espresar el motivo que lo guió al dictar semejante mandamiento. Obró á solicitud de la madre y para sujetar la cuestion al conocimiento de la autoridad judicial, lo cual me parece que funda y motiva bastante la razon del procedimiento.

Sobre todo, en el caso me parece que toda esta discusion carece de objeto, una vez que semejante orden no subsistió y que el depósito de la hija nunca puede importar un ataque á las garantías individuales del padre. Y siendo esto así, es mas claro que la luz que ni tiene de qué quejarse á este respecto el C. Quirino Jáuregui ni hay porque ampararle en los términos de la ley de 20 de Enero de 1869.

Tal es mi parecer, que vd. aprobará si lo creyere arreglado á justicia.

San Luis Potosí, Enero 20 de 1873.
—Firmado.—*J. M. Robles Linares.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Febrero 26 de 1873.—Por ocupacion del C. Gefe.—*Ausencio Pozo*, oficial 1º

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

San Luis Potosí, Febrero 23 de 1873.
—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Quirino Jáuregui, contra la providencia del C. Gefe político del partido de esta capital, que le mandó extraer de su lado á su hija ilegítima de cuatro años y meses de edad María Concepcion, á petición de la madre de esta, Dª Juana Oviedo; el escrito del quejoso; el informe de aquel funcionario y pedimento del representante del Ministerio público que rindieron conforme al art. 5º de la ley de 20 de Enero de 1869, para resolver sobre la suspension de los

efectos de aquella providencia; el auto en que se declaró no haber lugar á dicha suspension; el informe con justificacion del mismo C. Gefe político y el pedimento del representante del Ministerio público que rindieron conforme al art. 9º de la espresada ley; las pruebas rendidas por el quejoso y lo alegado por él; y considerando: que la orden de extraccion de la espresada niña María Concepcion no llegó á tener efecto y que como lo espresa el C. Quirino Jáuregui y el C. Gefe político, quedó reducida al depósito convencional de la niña en la casa del C. Lic. Gregorio Vazquez, electo depositario por el mismo quejoso.

Que tanto el C. Quirino Jáuregui como el C. Gefe político, están conformes en que se halla pendiente de la declaracion judicial, á quién del padre ó de la madre de la niña corresponde hoy tenerla en su poder.

Que no ha sido desmentida por el C. Jáuregui la aseveracion de que es casado y de que la niña procede de una union adulterina, sino antes bien en su alegato da á entender que es cierta la aseveracion, aunque espresa que es cuestion de que debe ocuparse otra autoridad que la presente.

Que el C. Gefe político en uso de sus facultades naturales ha pedido á petición de la madre como una providencia precautoria y como un medio entre los extremos decretar el depósito de aquella niña, mientras se pronuncie la declaracion respectiva, ya para evitar el escándalo si como aparece es casado Jáuregui y la niña adulterina, ya para evitar los disgustos y riñas de los padres si pendiente la decision judicial ha de estar la niña en poder de uno de los padres mas bien que del otro.

Que confiesa el mismo Jáuregui en su ocurno que de propia autoridad á causa de la mala conducta de la madre, que no ha probado, arrebató de su lado á la niña Concepcion, siendo así que debió acudir á la autoridad judicial, y no habiéndolo hecho pudo la madre pedir y el C. Gefe político si no decretar la extraccion de la niña del lado de Jáuregui, si ponerla en depósito como lo ha hecho, de conformidad con lo prevenido en la frac. 5ª, art. 11º de la ley núm. 39 de la actual II. legislatura.

Que no puede decirse violada con ese

hecho la garantía que otorga el art. 13 de la Constitución federal, porque el C. Gefe político no ha juzgado en este punto puesto que deja su resolución á la autoridad judicial; y respecto de la garantía contenida en el art. 16 del mismo Código, aunque aparece que el propio C. Gefe político usó de apremio y amenazas para obligar al C. Jáuregui á entregar á la niña, esto se esplica, porque una vez dada su orden correspondia á su dignidad hacerla cumplir y no consentir fuese burlada su autoridad, en cuya ejecucion si se escedió ya no es el recurso de amparo el que cabe por tratarse de hechos consumados, sino el que designa el art. 14 de la espresada ley núm. 39.

Por tales consideraciones y fundamentos legales, debia declarar y declaro:

Primero: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Quirino Jáuregui, contra la providencia del C. Gefe político del partido de esta capital, que le mandó extraer de su lado á su hija María Concepcion.

Segundo: no se condena al C. Quirino Jáuregui á la multa que señala el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, por su notoria insolvencia.

Hágase saber, publíquese en los periódicos de estilo y elévense estas actuaciones á la Corte Suprema de Justicia para su revision.

Así definitivamente juzgando, lo decretó, mandó y firmó el C. Lic. Conrado Díaz Soto, juez de Distrito del Estado. Damos fé.—Firmado.—*Conrado Díaz Soto.—Rafael Guzman.—Feliciano P. Reyes.*

Es copia que certifico. San Luis Potosí, Febrero 26 de 1873.—*Conrado Díaz Soto.*

EFECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí,

por D. Quirino Jáuregui, contra el Gefe político de esa ciudad, que mandó extraer del lado del quejoso á la niña Concepcion Oviedo, con cuyo acto cree vulneradas en su persona las garantías á que se refieren los arts. 13 y 16 de la Constitución federal, y considerando: que en el expediente aparece que la niña Concepcion fué mandada depositar por el Gefe político de San Luis Potosí, quedando á disposicion de la autoridad judicial: que en esto el Gefe político obró dentro de la esfera de sus facultades, y por lo mismo que no vulneró ninguna garantía individual; de conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la misma Constitución, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 23 de Febrero próximo pasado, por el juez de Distrito de San Luis Potosí, en la parte que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Quirino Jáuregui, contra el C. Gefe político del partido de esa capital, que le mandó extraer de su lado á su hija María Concepcion, y en la que declara: que no se condena al C. Quirino Jáuregui, á la multa que señala el art. 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, por su notoria insolvencia.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Arteaga.—Pedro Ordaz.—Ignacio Ramirez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auzu.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Abril 23 de 1873.—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

FIN DEL TOMO III.